

Tema 5. Violencia de género

Módulo 3. Análisis sectorial y perspectiva de género
en la Unión Europea

With the support of the ERASMUS+ programme of the European Union



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



G-NET

Equality training network
EU contributions to gender
mainstreaming and citizenship

'The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein'

- ©De la edición: *Equality Training Network: EU Contributions to gender mainstreaming and citizenship (G-NET)*, 2016
- ©De los textos y actividades: *Equality Training Network: EU Contributions to gender mainstreaming and citizenship (G-NET)*
- Elaboración:
- Adrià Calvet: Módulo 1, temas 1, 2 y 3.
Martha Zapata: Módulo 2, temas 1 y 2; Módulo 3, temas 2, 3 4 y 8.
Teresa Orozco Martínez: Módulo 2, tema 1; Módulo 3, tema 3.
Rocío Ramírez Rodríguez: Módulo 2, temas 2 y 4; Módulo 3, tema 2.
Anahí Napal Gutiérrez: Módulo 2, tema 3; Módulo 3, tema 2.
Paloma Pontón: Módulo 2, tema 5; Módulo 3, tema 1.
Núria Serret: Módulo 2, tema 5.
Víctor Merino: Módulo 3, tema 5.
Neus Oliveras: Módulo 3, tema 6.
Ana Giménez y Cristina Villó: Módulo 3, tema 7.
Alrik Schubotz: Módulo 3, tema 8.
Sabrina G. Benedetto, María Julieta Cortés y Patricia Rojo: Módulo 4, tema 1.
Ximena Araneda Fornachiari y Ana Rosa Ruiz Fernández: Módulo 4, tema 2.
Mariela Zelada Ochoa, Maricruz Alvarez Mury y Jacqueline García de De León: Módulo 4, tema 3.
Mónica Baeza Leiva, Scarlett Lagos Fuentes y Alberto Olivares: Módulo 4, tema 4.
- Coordinación: Inma Pastor
- Supervisión: Virginia Maquieira, Pilar Folguera, Laura Román, Ana Giménez, Víctor Merino, Teresa Torres y Neus Oliveras.



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons: en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría, no hacer uso comercial y difundir bajo la misma licencia CC que esta obra original.

La licencia completa puede consultarse en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



Equality training network

EU contributions to gender
mainstreaming and citizenship

Es una red de universidades de América Latina y Europa que imparten cursos sobre Integración Europea y Género y diseñan contenidos educativos para ser impartidos en las instituciones de educación superior. La actividad de la red se dirige a estudiantes,

responsables técnicos/as y políticos/as y personal investigador. El proyecto añade valor al análisis de las relaciones entre América Latina y la UE como fuente de desarrollo económico y social, mediante la construcción de ciudadanía y sociedades inclusivas, y reflexiona sobre buenas prácticas de la UE que han llevado a cabo la incorporación efectiva de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades entre los miembros de la Unión Europea.

Los contenidos educativos se concretan en los materiales didácticos ya testeados en las diferentes capacitaciones de las universidades de la red previstas en el proyecto y que mediante este medio se ponen a disposición pública bajo una licencia de Creative Commons para que puedan ser utilizados por aquellas personas o instituciones que lo consideren.

Los materiales se estructuran en diferentes módulos temáticos, cada uno de los cuales se divide en diversas unidades o temas de interés. Cada unidad dispone, al menos, de un marco teórico, una presentación y lecturas recomendadas.

Más información sobre la red G-NET y descarga de materiales en Internet (<http://www.gendertraining.eu>).

Contenido

1. Introducción. Modelos explicativos y tipos de violencia	5
1.1. Modelos explicativos de la violencia de género	6
1.2. La violencia doméstica	9
1.3. La violencia de género	12
2. La lucha contra la violencia de género en la Unión Europea	18
2.1. Las iniciativas de la Unión Europea en la lucha contra la violencia de género	18
2.2. La protección de las víctimas de la violencia de género en la Unión Europea.....	20
2.3. La Convención de Estambul	23
3. Retos y limitaciones	24
4. Referencias bibliográficas.....	26
5. Recursos	29

Violencia de género

Objetivos de aprendizaje

1. Conocer las principales definiciones y los conceptos básicos más importantes en relación a la violencia de género.
 2. Conocer y comprender la violencia de género desde una perspectiva interdisciplinar, de forma sistemática y crítica. Conocer sus orígenes, presupuestos teóricos y sus consecuencias.
 3. Analizar la violencia de género sobre la base del respeto a los derechos y principios fundamentales propios de la Unión Europea, especialmente atendiendo a la protección de las víctimas de violencia de género.
 4. Profundizar en la naturaleza común de estos problemas tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea como del Consejo de Europa. Prestando especial atención a los problemas de protección frente a la violencia de género en los casos de movilidad transfronteriza dentro de Estados miembros de la Unión.
-

Resumen

En este capítulo trataremos de estudiar los marcos explicativos de violencia de género y la relevancia de optar por uno u otro. El sintagma que se utilice importa a efectos de delimitar su contenido y sentido y como éste se traslada al marco jurídico. Este proceso de configuración jurídica se ha visto envuelto en discusiones que han confundido, en ocasiones, los modelos explicativos, las causas, el propio fenómeno, los efectos, sus caracteres... Y es que la multidimensionalidad de la violencia dificulta su regulación jurídica, pero, además, tratar de delimitar las normas jurídicas con las que poder combatirla constituye un reto para el Derecho. Su reciente incorporación, inicialmente a través de los instrumentos de Naciones Unidas, al mundo jurídico ha exigido plantear nuevos conceptos, institutos y normas, como resultado de un cruce de fronteras entre las distintas disciplinas que han aportado epistemologías y concepciones de este fenómeno.

1. Introducción. Modelos explicativos y tipos de violencia

En este capítulo trataremos de estudiar los marcos explicativos de violencia de género y la relevancia de optar por uno u otro. El sintagma que se utilice importa a efectos de delimitar su contenido y sentido y como éste se traslada al marco jurídico. Este proceso de configuración jurídica se ha visto envuelto en discusiones que han confundido, en ocasiones, los modelos explicativos, las causas, el propio fenómeno, los efectos, sus caracteres... Y es que la multidimensionalidad de la violencia dificulta su regulación jurídica, pero, además, tratar de delimitar las normas jurídicas con las que poder combatirla constituye un reto para el Derecho. Su reciente incorporación, inicialmente a través de los instrumentos de Naciones Unidas, al mundo jurídico ha exigido plantear nuevos conceptos, institutos y normas, como resultado de un cruce de fronteras entre las distintas disciplinas que han aportado epistemologías y concepciones de este fenómeno.

La diversidad de postulados y concepciones justificaron un cambio de percepción de este fenómeno al señalar el carácter social de la violencia, en cierto modo, específica, a la que se enfrentaban las mujeres por razón del género, si así podemos definirla. Como se explica en este tema, las primeras aproximaciones jurídicas, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en los ordenamientos nacionales, a la violencia contra las mujeres centran su atención en la violencia en la pareja o violencia doméstica. Tras la confluencia de distintos avances se llega a los que probablemente sean los conceptos mayormente aceptados, el de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el de la Plataforma de Acción de Beijing, que introducen marcos conceptuales y jurídicos que responden a un modelo explicativo que señala el género y las relaciones históricamente desiguales entre mujeres y hombres como la causa de la violencia.

Los documentos más significativos que muestran la evolución cronológica en la construcción de este marco evidencian que inicialmente desde Naciones Unidas no se pretendía articular una categoría general de violencia de género, ni desvincular los mecanismos jurídicos para hacerle frente del principio de igualdad formal dominante entonces en el régimen general de derechos humanos. Así, una de las primeras definiciones de violencia de género la ofrece el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres en su Recomendación General número 19, que calificó la violencia sobre las mujeres como una forma de discriminación. En ella, el Comité entendió como causa única la relación de discriminación entre los sexos y, por tanto, se concibió como aquella “violencia dirigida contra la mujer porque es mujer”. A partir de entonces, como veremos a continuación, se van formulando nuevos marcos

conceptuales que se justifican en los modelos explicativos que se proponen: (i) se admite el vínculo entre discriminación y violencia, (ii) se engloba bajo un único concepto diversos actos que pueden ser calificados como violencia sobre la mujer y (iii) se especifica que las medidas dirigidas a la eliminación de la violencia han de estar enfocadas hacia las estructuras y contextos en los que tal violencia se origina.

Las primeras referencias se limitaban a señalar manifestaciones particulares de violencia, como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la prostitución forzada o la violencia en la familia ejercida sobre mujeres, sin precisar un nexo claro entre ellas, ni tampoco un contenido común. Lentamente se va recurriendo y creando una categoría general de violencia de género, cuyo significado ya se atisbó en las Estrategias de Nairobi y fue finalmente configurada en la Cuarta Conferencia Mundial celebrada en Beijing bajo los términos de “violencia género específica”.

1.1. Modelos explicativos de la violencia de género

El estudio del tratamiento jurídico de la violencia contra las mujeres basada en el género es complejo. Y lo es por diversas razones. Primero, por la complejidad que caracteriza al propio fenómeno que analizamos. La violencia es una realidad multidimensional que produce múltiples efectos sobre las personas contra las que se ejerce. Del mismo modo que son diversas las causas que llevan a la comisión efectiva de un acto violento. En segundo lugar, por las implicaciones que se derivan del marco conceptual y su modelo explicativo, así como del marco jurídico a los que se recurra, porque ambos determinan el ámbito de aplicación y la validez de las medidas que se adopten para poner fin a la violencia. Por este motivo, cabe exponer los distintos desarrollos teóricos propuestos con el fin de explicar la naturaleza y los caracteres de la violencia.

Por tesis o modelo explicativos cabe entender los marcos epistemológicos que atribuyen significado a este fenómeno concreto. Se trata de marcos que plasman un concepto y que en este caso se remiten a las categorías, identidades y relaciones de género para significar la violencia. En suma, configurar un marco teórico sistematizará un fenómeno complejo, señalando los elementos comunes que lo individualizan, y de ello va a depender el concepto de violencia que se utilice. Estos últimos, a su vez, van a permitir relacionar los distintos actos que son susceptibles de adscribirse a una categoría general, como es la de violencia de género. La categorización de la violencia basada en el género comienza cuando se afirma su origen social y cultural, lo que invalida los discursos biologicistas que defienden la jerarquía

“natural” de un sexo sobre otro. Si esto es así, cada acto violento tiene un origen social y cultural concreto, que depende de la comunidad en la que se comete (Wilcox, 2006; Nussbaum, 2000). Esto es, un contexto en el que los diversos agentes sociales se ubican y que contribuye a delimitar los modelos y patrones de género. Además, en este contexto se sustentan los discursos que la legitiman y/o deslegitiman.

Cabe señalar que se recurre aquí a la terminología empleada por Villacampa, quien define ambas como “tesis explicativas”. Las primeras se llaman “tesis estructuralistas” frente a las segundas “tesis etiológicas o sociales de carácter no estructural” (Villacampa, 2008). Veamos las consecuencias. En relación con la contraposición de los marcos conceptuales, Johnson indica que la doble perspectiva se debe al abordaje de dos fenómenos distintos. En un primer momento, como decíamos antes, existe una perspectiva para explicar la violencia en la familia y una perspectiva feminista que identificaba la denominada violencia de género (Johnson, 1995). Referente al contenido común de la violencia doméstica y aquella que también lo es y además se basa en el género, Johnson distingue entre una violencia resultado de conflictos individuales en los que el género no es un factor relevante y, por el contrario, aquella que se ejerce como método de control de las mujeres por parte de sus parejas hombres (Johnson, 2005).

Las primeras señalan las relaciones desiguales como origen de la violencia, mientras que las segundas subrayan que las causas dependen de las circunstancias particulares del caso concreto. En este sentido, Larrauri señala que es problemático motivar un acto de violencia en la pareja exclusivamente en la desigualdad de género, preeminentemente por dos motivos: i) Porque se obvian otros factores que conforman las identidades de las mujeres y; ii) porque se reiteran esquemas basados en un rígido concepto del género (Larrauri, 2007). No obstante, se promueve aquí una primera tesis admitiendo un concepto de género y de relaciones de poder con los caracteres enunciados con anterioridad. Con todo, cabe señalar que esta tesis no afirma que un marco estructural de desigualdad sea la causa directa y única de la comisión efectiva de la violencia, sino que se esgrime más bien a efectos de identificar unos determinados rasgos de las estructuras sociales sobre las que se construyen las relaciones y las identidades de género, así como la normatividad derivada de las anteriores. En suma, se designa un entramado que origina y sustenta una categorización de esta violencia.

También Corsi sugiere un modelo explicativo desde la psicología que probablemente sea uno de los modelos más completos sobre las causas de la violencia al señalar distintos elementos y rasgos tenidos en cuenta en otros modelos. Nos referimos al llamado modelo ecológico, que distingue a su vez cuatro niveles:

- i. En el *macrosistema*, se contemplan las construcciones e interpretaciones culturales acerca de las identidades y las nociones de poder. Esto es, las relaciones de subordinación, las estructuras de género, etc. Corsi añade, por ejemplo, la concepción de la familia. A partir de este estadio se señalan las distintas etapas en las que discursos y prácticas relacionados con el género se materializan en actos concretos de violencia.
- ii. En el llamado *exosistema*, se produce la institucionalización de identidades, estructuras y nociones originadas en el *macrosistema*. Las instituciones, y demás agentes socializadores, las mediatizan y reproducen en distintos escenarios sociales, como el trabajo, los espacios educativos, medios de comunicación, etc.
- iii. En el llamado *microsistema*, el ámbito de producción de discursos y prácticas se reduce a las familias, y el entramado anterior se reproduce mediante identidades y demás elementos que se construyen en este determinado espacio.
- iv. El *nivel individual* se reduce a los procesos psicológicos a través de los cuales se interiorizan y reproducen los factores anteriormente enunciados, y que materializan las identidades y las relaciones entre individuos (Corsi, 1997).

En el caso de la violencia de género, el macrosistema contiene las estructuras y sistemas de género, incluyendo las disposiciones que del mismo se generan. Si esto es así, es posible analizar los actos concretos de violencia, según el contexto en el que se inscriban. Según esto, cualquier acto o práctica que consideremos violencia contra las mujeres basada en el género, como los matrimonios forzosos o las agresiones sexuales, desarrolla en cada nivel unas determinadas concepciones sobre el género, las identidades y sus significados, a través de distintos agentes hasta llegar al acto individual.

Los trabajos actuales acerca de los modelos que explican los actos concretos de esta violencia coinciden en la diversidad de dimensiones o contextos desde los que explicar un acto concreto de violencia. Principalmente cabe distinguir, en criminología, dos modelos aplicados a la violencia en la pareja (recordemos que estos se articulan sobre actos concretos y no como modelos explicativos de la categoría de violencia), uno llamado etiológico y el de género. El primero concibe el acto violento como resultado de una conducta interpersonal. Las causas o el origen de la violencia dependen de las cualidades, experiencias, en definitiva, rasgos individuales de los sujetos que intervienen en dicho acto. Por el contrario, otras corrientes criminológicas tratan de explicitar esta violencia en las relaciones de subordinación.

Es necesario atender a la distinta operatividad de los elementos que se analizan. Por ello, cuando Medina o Larraruri indican que en el análisis de la violencia en la pareja deben atenderse a los “factores de riesgo”,

no niegan el marco estructural en el que se inscriben estos actos. Siempre y cuando la manifestación particular de la violencia, la conducta individualmente considerada, pueda concebirse como un acto de violencia contra las mujeres de género. La tarea es desvelar “el elemento diferenciador”, sin negar la complejidad de los fenómenos. El modelo explicativo no debe tratarse como el factor único o último de la fenomenológica de la violencia. Pero es esencial que este marco se haya instalado en el ámbito de lo cotidiano, a través de la introducción en el discurso jurídico de esta violencia. La tesis explicativa acerca de esta violencia se puede inscribir en él, teniendo en cuenta su interacción con otros sistemas y carácter dinámico. En otras palabras, se trata de un proceso a través del cual la categoría general se materializa en actos concretos, que, en su caso, “hacen género”, y se retroalimenta la cadena.

1.2. La violencia doméstica

Los primeros acercamientos teóricos acotan el objeto de estudio de la violencia contra las mujeres a aquella violencia ocurrida en el ámbito familiar y/o en una relación de pareja. Es decir, la llamada violencia doméstica. En principio su criterio identificador no es la relación de poder desigual basada en el género sino el espacio en el que se producen los actos violentos, aunque se intuyen algunos aspectos coincidentes. Y es que a pesar de tratarse de tipos de violencia distintos, parte de su contenido es semejante porque en ellos se hace referencia en concreto a supuestos de violencia ejercida contra las mujeres, cuando si es el ámbito doméstico el que la caracteriza no debería diferenciarse el tipo de sujeto contra el que se ejerce. Esto posibilita que algunos de estos estudios identifiquen como su causa las relaciones de poder desiguales entre agresor y víctima. Comienza entonces a apreciarse una “mitología sexista” que produce efectos semejantes a la afirmar su origen exclusivamente en el sexo de la víctima, por lo que a pesar de todo comienza a señalarse que debe superarse la consideración de esta violencia como un acto privado (Schechter, 1996).

Esta restricción inicial tiene consecuencias directas en relación con la ausencia de una prohibición jurídica de esta violencia en los textos internacionales, y también en los ordenamientos nacionales, al menos porque no se considera un acto lo suficientemente grave (y sobre todo por su carácter privado) para ser prohibido por el derecho (Calvo, 2004). Con posterioridad, y de forma similar a la evolución epistemológica, el conflicto entre el modelo explicativo basado en el género (propio de la epistemología feminista, que concibe la violencia como resultado de las relaciones de poder desiguales entre los géneros) y el llamado modelo de violencia interpersonal o etiológico (que concibe esta violencia como resultado de la conjunción

de diversos elementos, tomando como objeto de análisis los actos individualmente considerados), que tienen un mayor predicamento en los estudios criminológicos, se traslada al ámbito jurídico. Como se verá con detalle en los siguientes epígrafes.

Como decíamos, las primeras aproximaciones a la violencia de género se centran en la violencia doméstica o en la pareja, esto es, en función del ámbito, espacio o contexto en el que se producen. Esto significa que son estudios sobre un tipo específico en el que puede haber violencia de género pero que se caracteriza por el ámbito, contexto o espacio en el que se produce. Así las cosas, desde el ámbito de la psicología y la sociología se han planteado diversos modelos que han tratado de determinar las razones de esta violencia concretada, principalmente, en la violencia intrafamiliar. Radicar esta violencia en la familia concibe cualquier daño dirigido contra uno de los miembros como atentatoria de valores como la paz familiar, las relaciones familiares.... No hubo entonces una referencia específica a motivos de género, aunque se constata desde un comienzo que este tipo de violencia se ejerce con mayor frecuencia contra mujeres. Por ello, podemos decir, no toda relación en la pareja, ni aquella que en este ámbito se ejerce sobre las mujeres, supone violencia contra las mujeres basada en el género.

En relación con lo anterior, como ha señalado Maqueda, la distinción entre violencia de género y violencia doméstica es imprescindible a efectos de determinar “los sujetos de referencia” que van a condicionar la regulación jurídica que cada fenómeno va a propiciar. Según Maqueda, todas las formas y manifestaciones “tienen en común (...) el sometimiento de las mujeres (...) a un orden de valores que la victimiza en un espacio de poder dominado por otros”. Sin embargo, esta distinción entre violencia doméstica y violencia de género todavía no se ha efectuado en muchas legislaciones, en las que el legislador no distingue las distintas manifestaciones de violencia o no incluye una referencia a la violencia basada en el género. Es por ello que existen regulaciones en las que las relaciones de pareja se equiparan a situaciones de especial vulnerabilidad, aunque se obvie que la violencia contra las mujeres es una violencia entre iguales, no vulnerables.

A nivel internacional, ha sido la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres quien ha clarificado las diferentes nociones de violencia contra las mujeres. En el primero de sus informes, bajo el extenso título *de Intensificación de la promoción y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la Comisión. Otros criterios y medios que ofrece el sistema de las Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y*

consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, aborda la cuestión de la violencia en la familia específicamente. La Relatora adopta el criterio de la DEVAW al interpretar los tipos de violencia en función del ámbito en el que se producen, y por ello en primer lugar se refiere a la violencia en la familia o violencia doméstica.

Dada la problemática alrededor de esta violencia acontecida en el ámbito privado, advierte de la “aparente neutralidad del término” para afirmar la especial incidencia de la misma contra las mujeres. Advirtiendo de la “especificidad sexual de la violencia en el hogar”, la Relatora subsume la justificación de la existencia de esta violencia dirigida contra las mujeres en las relaciones de pareja en las relaciones de desigualdad (párrafos 22 y siguientes). Esta premisa le lleva a identificar que el ámbito familiar es un espacio en el que se genera violencia, y no toda ella es de género. Es importante distinguir un tipo específico que sí lo es y que comparte con el resto de tipos determinados rasgos que la especifican. Un mayor desarrollo de la materia frente al informe inicial se refiere a la calificación de la familia. Su informe se articula en base a un concepto de familia amplio definido por la existencia de una relación personal íntima, lo cual parece reconducir esta violencia a las relaciones de pareja.

La Relatora reitera que uno de los mecanismos de legitimación de la violencia ha sido la escisión entre lo público y lo privado. La concepción que se ha dado de la violencia en el hogar como actos privados refuerza esta dicotomía, y legitima la no intervención por parte del Estado en las cuestiones “privadas”. Insta a buscar desarrollos conceptuales - marcos, podemos decir - que incidan en este aspecto para conseguir la ruptura de dicha escisión. Para la Relatora no hay duda que “la violencia en el hogar es un poderoso instrumento de opresión”. Así, la definición ofrecida en este informe entiende la violencia en la familia “como toda violencia cometida en el ámbito doméstico y que se dirige contra la mujer debido a su papel en ese ámbito, o bien la violencia dirigida en forma directa y negativa a la mujer en el ámbito doméstico”. Se deduce de esta definición la especificidad de la misma, evitando las cualidades íntimas que suelen destacarse, así como la inclusión de diversos actos que hasta ahora se excluían.

Es importante, en este sentido, ampliar el ámbito de protección más allá de las relaciones en pareja si se quiere afirmar la especificidad de la violencia, en su caso. Queremos decir con ello que si se analiza la violencia en el ámbito familiar, y se afirma que existe una violencia contra las mujeres que puede o no producirse en este ámbito, es necesario que se identifiquen los supuestos que pueda haber. En el ámbito familiar, existen diversas relaciones que pueden, o no, depender del género (por ejemplo, de ascendientes a ascendientes, entre hermanos, etc.). De este modo, el ámbito es determinante de las circunstancias en

las que se produce el tipo concreto, y puede posibilitar la existencia de manifestaciones particulares, pero la determinación de la especificidad en las relaciones de género particulariza otros tipos de violencia más allá de la ejercida sobre las mujeres en la pareja.

1.3. La violencia de género

La categorización de la violencia contra las mujeres basada en el género y, por tanto, un modelo explicativo que excede la violencia doméstica, no rechazan que las mujeres sean agentes activos de violencia. Su singularidad se infiere de su origen, y no tanto por el espacio o el sexo de agresor y víctima. Por ello, el elemento que determina su naturaleza hasta identificarla, cabe insistir, es el factor que afirma que estamos ante una categoría general que engloba actos con un contenido común. Esto distingue aquella violencia que se ejerce contra las mujeres por unos motivos determinados de cualquier otra. Es decir, se requiere que se ejerza contra las mujeres porque la opresión deriva de identidades, relaciones y parámetros de género, y se ha construido de forma tal que asigna posiciones de poder a hombres, y de ausencia de poder a las mujeres. Esto no niega que las mujeres son agentes con poder (por ello hablamos de estructuras y sistemas) ni que ocupen posiciones de poder en otras relaciones de dominación distintas del género (Hooks, 2000). Debe recordarse que las estructuras de género surgidas del sistema sexo/género interactúan con otras estructuras, al interactuar con otros sistemas sociales, lo que genera otras identidades múltiples y relaciones diversas. Y así sucede con la tipificación de los primeros actos de violencia de género que se prevén en los ordenamientos.

De todo lo anterior puede entenderse que el acto de violencia de género que primero se prohíbe en los ordenamientos es la violación sexual, en un marco jurídico que atraviesa por una evolución similar a la mencionada en relación con los modelos explicativos. Su tipificación requiere la definición de la conducta que se entiende prohibida y la identificación del bien jurídico protegido. Las controversias comienzan cuando se regula contra un delito contra el honor del mismo modo que se interpreta en el orden internacional. Esto es, violar es un atentado contra el honor de los varones emparentados con las mujeres contra quienes se ejerce dicha violencia (Sen, 2005). Ello evidencia que los operadores jurídicos crean y aplican el derecho según la construcción social de los géneros y las relaciones entre ellos, y que la regulación se justifica en los mismos. Siendo consciente de los distintos ámbitos de que se trata, y apostando por la conveniencia de cruzar las barreras entre los estudios de la violencia, conviene exponer

la interpretación procedente de distintas disciplinas y corrientes con objeto de mostrar la capacidad explicativa de cada modelo y cada marco jurídico.

Con objeto de promover una definición que integre cuantos rasgos sea posible, desde estas corrientes y aportando al modelo anterior una perspectiva más sociológica, se señala un contenido común que comparten los distintos tipos de violencia que a su vez constituye el criterio que singulariza la categoría general (Kelly, 1998). Esta noción subraya el carácter estructural de la subordinación y reitera que la expresión “violencia contra las mujeres basada en el género” incluye aquellos actos que se dirigen contra las mujeres y que son resultado de unas relaciones y estructuras de género que colocan a las mujeres en dicha posición de subordinación.

En primer lugar, Kelly aporta un concepto basado en la epistemología feminista según la cual por violencia sexual se entiende “cualquier acto físico, visual, verbal o sexual que es experimentado por una mujer o una niña, en ese mismo momento o ulteriormente, como una amenaza, una invasión o una agresión, y que tiene el efecto de hierirla o denigrarla, y/o reducir su capacidad de decisión afectiva”. Esta definición, señala la autora, permite entender que son diversos los actos que la componen y que guardan cierta relación entre sí, supeditando su existencia a la percepción que tengan aquéllas sobre quienes se ejerza. Al igual que en la DEVAW, si sólo se propone este rasgo, el marco explicativo se justifica exclusivamente por los efectos que la categoría comprende. Razón por la cual conviene añadir una tipología de actos con la finalidad de dotar de contenido la categoría y consolidar la identificación del criterio común. Además, de ello se deriva una mayor seguridad jurídica favorable para la protección del mayor espectro posible de actos, siempre que no sea un listado exhaustivo que agote las posibilidades de su aplicación.

En este caso, la definición se ciñe al sujeto sobre quien se ejerce, aunque previamente se sitúe esta violencia en un contexto de relaciones de poder en el cual el control de las relaciones sociales de género se convierte en propósito y resultado. Asimismo, tiene ciertos rasgos esencialistas al situar a las mujeres como víctimas, y obviar que es el paradigma de los derechos el contexto en el que deben incardinarse sus efectos. Las objeciones al carácter esencialista y una concepción rígida de las relaciones entre los géneros son difícilmente superables. En concreto, se ha dicho, porque soslaya aquellas objeciones proponiendo unas estructuras y un sistema de género de carácter contingente. Lo cual no parece incluirse en la definición anterior.

A diferencia de Kelly, algunas corrientes sostienen que este fenómeno ocurre sólo tras la interacción de las estructuras de género (que provocan relaciones patriarcales) con otras estructuras que proceden de otros diferentes sistemas sociales. Es decir, que las posiciones de subordinación no se ocupan siempre y en todo caso por mujeres, sino que dependen del significado que el sistema sexo/género otorgue a los géneros y de ellos se infiera un tipo concreto de relaciones. Además, las identidades y relaciones de género se construyen tras la interacción de éste y el resto de sistemas sociales. De ahí que las identidades pueden ser tan diversas como combinaciones posibles existen y sobre ellas se inscriben las prácticas culturales que en un determinado contexto legitiman y reproducen este tipo de violencia. Se recurre a estos modelos, por tanto, con objeto de hacer posible la traslación del marco basado en el modelo explicativo al marco jurídico, si esto es posible.

Las últimas corrientes críticas definen la violencia como un *continuum*. Scheper-Hughes y Bourgois coinciden en conceptualizarla no sólo a partir de sus manifestaciones, sino también desde su dimensión social y cultural (Scheper-Hughes & Burgois, 2004). Es decir, desde todos los ámbitos donde se significa el género y las relaciones que se infieren de unos significados concretos de ser hombre y mujer. Por ello, cuando se refieren a la noción de *continuum*, afirman la relación entre distintos tipos de un mismo fenómeno que se categoriza en tanto que comparten un sustrato común. En este marco, Bourgois propone una clasificación de los tipos de violencia a partir de un estudio sobre el conflicto salvadoreño, y señala la existencia de violencia política, estructural, simbólica y cotidiana (Bourgois, 2004). Esta clasificación explica la vinculación entre las estructuras de subordinación y el fenómeno violento, así como las posibles manifestaciones de la violencia en sus diversos contextos. Y se recurre a ella también por su capacidad para interrelacionar el modelo explicativo, los marcos conceptuales y su fenomenología.

De ser así, la violencia estructural es consecuencia de situaciones de desigualdad social y económica, invisibilizadas mediante su permeabilidad con aquellas concepciones y discursos creados como herramientas para su legitimación social. Esta violencia forma parte del llamado modelo triangular de Galtung, según el cual, esta violencia se genera a partir de una violencia de tipo cultural (que es aquella que Bordieu llama simbólica), y ocasiona un estatus de subordinación y exclusión institucional, que dados los caracteres y la naturaleza del género constituyen una forma predominante de la violencia que se basa en él, en cuanto ésta se produce con frecuencia a través de prácticas cotidianas por parte de las instituciones que imponen un orden social que a su vez genera violencia (Margallón, 2005). Con ello se

hace referencia, pues, a la normatividad social que regula una determinada colectividad y se interioriza por sus miembros confirmando su carácter estructural.

Cercana a ello, Scheper-Hughes conceptualiza un cuarto tipo de violencia llamada violencia cotidiana ("everyday violence"), constituida por aquellas prescripciones violentas que pasan a formar parte del imaginario colectivo como conductas toleradas socialmente (Scheper-Hughes, 2004). En realidad, esta concepción hace referencia a los actos interpersonales con el propósito de emplazarlos en el marco conceptual. Según éste, las estructuras de género y la creación de estereotipos y representaciones de las primeras (re)producen la violencia. Su estudio de la violencia cotidiana en Brasil, en el período de 1964 a 1985, ejemplifica cómo puede ser utilizada para generar un estado de terror (por lo que se remite a Taussig (2004)), que se concibe y opera como estrategia política destinada a un determinado objetivo. La normalidad con la que se reproduce esconde sus caracteres, especialmente cuando es resultado de una violencia estructural, en el sentido acuñado por Bourgois. Por ello se exige la revisión de los marcos explicativos en los que se producen los distintos tipos de violencia, como ella misma sugiere. A través de la naturaleza que otorga a esta categoría, Scheper-Hughes, en sus propios términos, "desdibuja" cualquier distinción entre la violencia en tiempos de paz y en tiempos de conflicto armado. Esta noción, por tanto, ubica la violencia en las distintas instituciones sociales, consideradas "espacios normativos sociales" (Scheper-Hughes, 2004). Y este carácter institucional no puede ser explicado desde tesis puramente etiológicas que pretenden dar cuenta de conductas individualmente consideradas.

Según todo lo anterior, la desigualdad desde la que se origina la violencia es estructural, social, sistémica y difusa, de acuerdo con Barrère y Morondo. Estos caracteres promueven su interiorización por parte de los sujetos a través de procesos de conformación de las identidades y de ellos depende que la violencia se produzca de una u otra forma. Según Barrère y Morondo, se trata de una "desigualdad de status o poder instituida por una norma (o, mejor, un sistema de normas) que no aparece explícitamente recogida en ningún *corpus* (de ahí lo de discriminación "difusa"), pero que estructura el funcionamiento social y se reproduce tanto sistemáticamente (al margen de la intencionalidad o voluntad de individuos aislados) como institucionalmente, en la medida en que las instituciones que rigen la vida social no efectúen políticas activas o "positivas" en su contra" (Barrère y Morondo, 2005). Si éste es el origen, así debería incluirse en los marcos jurídicos que la prohíban.

En este sentido, el establecimiento de una definición general de la violencia no obsta para afirmar que las circunstancias en las que se manifiesta cada uno de los actos englobados bajo la categoría general

condicionan la violencia y la necesidad de una medida u otra para su eliminación. Por ello, las definiciones de violencia de la DEVAW y Beijing son comúnmente aceptadas a nivel nacional e internacional. En ellas se establece un marco conceptual que plasma una de las ideas más importantes sobre las raíces de este fenómeno violento; la violencia como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y, de ahí, la concepción social y estructural de la misma basada en la subordinación. Del mismo modo, la remisión a sus causas y efectos son indicios de la incorporación del modelo explicativo proveniente de teorías feministas a un texto de naturaleza jurídica. El Preámbulo reitera la convicción de que se requiere “una definición clara y completa de la violencia contra la mujer”.

Por ello se dispone que “(a) los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. En definitiva, el criterio definitorio de la violencia se deduce de la rúbrica “basados en la pertenencia al sexo femenino”, aunque deba entenderse según el marco de las relaciones de desigualdad referidas en el preámbulo.

Si esto es así, su exégesis se basa en los siguientes factores:

- i. El sujeto sobre el que se ejerce la violencia es la “mujer”. Este es el elemento identitario, dado que se prohíbe sólo aquella que se dirige de forma exclusiva contra ellas, y ello no se supedita a la concurrencia de ningún otro rasgo. A diferencia de la violencia familiar, caracterizada por el ámbito o espacio en el que se comete, la violencia contra las mujeres se singulariza por el sexo del sujeto sobre quien se ejerce. Sin embargo, la propia Declaración parece auspiciar un concepto más complejo, vislumbrando la existencia de razones más allá de la pertenencia “al sexo femenino”. De hecho, de los rasgos enunciados y del sentido general del texto es posible afirmar que la violencia contra las mujeres es una violencia “específica”. El matiz, que se intuye a falta de mayor detalle, reside en el carácter estructural que emana de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros. Es decir, que su origen social no se debe al significado de los sexos, sino a los caracteres y el valor que se atribuye a los géneros y que supeditan las relaciones entre ellos.
- ii. La Declaración admite su posible concurrencia indistintamente del ámbito en el que se produzca. Esto es, “tanto en la vida pública como en la privada”. Se asume, como sustrato de la regulación,

que la separación de las esferas pública y privada ha sido un obstáculo preeminente que ha impedido el acceso y el goce de los derechos, y ha legitimado la impunidad de los actos violentos, aduciendo que su comisión se produce en un ámbito percibido exento de la intervención y la responsabilidad estatal. Por ello, la visibilización y sucesiva comprensión de la violencia como un problema social, que ya no privado, es uno de los objetivos prioritarios de Naciones Unidas desde este momento.

De igual forma se define este fenómeno en la Plataforma de Acción de Beijing, según la cual, "La expresión "violencia contra la mujer" se refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Por consiguiente, la violencia contra la mujer puede tener, entre otras, las siguientes formas:

- a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación;
- b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
- c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Cabe subrayar ahora que ambas nociones afianzan los caracteres sistémico y estructural de este fenómeno, así como su anclaje en relaciones de desigualdad entre los géneros. Con mayor razón cuando la articulación del concepto forma parte de un proceso que recurre a un modelo explicativo construido a partir de las relaciones patriarcales entre los géneros (Bodelón, 2006; Villacampa, 2008).

2. La lucha contra la violencia de género en la Unión Europea

2.1. Las iniciativas de la Unión Europea en la lucha contra la violencia de género

A pesar de que la UE no ha asumido competencias exclusivas ni compartidas para intervenir en el ámbito de la violencia de género, la UE ha desarrollado diversas iniciativas para eliminar cualquier manifestación de violencia sexista y paliar sus efectos sobre las víctimas. En este sentido, las iniciativas de la Unión en el ámbito de esta violencia se han vinculado a diferentes políticas comunitarias (mercado laboral, sanidad...), y a diferentes instrumentos jurídicos genéricos (como la prohibición de todo tipo de discriminación del art. 10 del Tratado fundacional de la Unión Europea, o más tarde, a ciertos principios y derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (respeto a la dignidad humana, derecho a la integridad física o psíquica, o la prohibición de la tortura, o de los tratos inhumanos o degradantes). Esta tendencia puede observarse, por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra todo tipo de discriminación por razón de sexo en el mercado laboral y la consecuente regulación del acoso sexual o acoso en el trabajo.

Entre algunas iniciativas concretas, cabe señalar que en junio de 1986, el Parlamento Europeo aprueba la Resolución sobre las agresiones a la mujer, y en 1990, el Consejo aprueba la Resolución de mayo de 1990 sobre la protección de la dignidad de las mujeres y hombres en el trabajo en la que se recoge una tímida definición de acoso sexual. Un año más tarde, en junio de 1991, el Parlamento acuerda el Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo. Aunque la Directiva 2004/113/CE recoja la definición de acoso sexual (que había sido introducida en la Resolución del Consejo de 1990 y por la posterior Recomendación del Parlamento), debe insistirse en que buena parte de estas iniciativas no tienen valor vinculante para los Estados miembros, por lo que señalaremos aquellas iniciativas más relevantes, teniendo en cuenta que sólo en materia de protección de víctimas de violencia se han promulgado Directivas y Reglamentos que han compelido a los Estados a modificar su legislación.

En este sentido, es a partir de 1995, tras los acuerdos asumidos en la IV Conferencia Mundial de Beijing, cuando se inicia una etapa de compromiso institucional de la UE en la lucha contra la violencia de género. Las primeras acciones fueron campañas de sensibilización y la adopción de programas de financiación de proyectos de ayuda y apoyo a determinadas organizaciones. En el primer grupo se encuentra la campaña de europea "Tolerancia Cero ante la Violencia contra las mujeres" (1997), y en el segundo destaca especialmente el programa DAPHNE, aprobado conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo

de forma periódica, que desde 1997 trabaja con el objetivo específico de prevenir y combatir todas las formas de violencia, tanto en la esfera pública como privada, que afecten a niños, jóvenes y mujeres a través esencialmente de acciones de promoción dirigidas a organizaciones no gubernamentales, de campañas de sensibilización, de estudios sobre la violencia y sus efectos y de creación de redes multidisciplinarias que trabajen sobre este ámbito.

Paralelamente, ha habido diversas iniciativas que se han traducido en conclusiones del Consejo, programas de acción de la Comisión y una intensa actividad del Parlamento Europeo a través de resoluciones, en las que se aprecian los objetivos estratégicos que guían las acciones de la Unión en esta materia. Así, la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de abril de 2011 incluye las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la Unión para combatir la violencia contra las mujeres, según la cual:

- Se acoge una definición amplia de violencia de género, que incorpora la versión dada por la DEVAW, pero que también implica a los diferentes servicios implicados en su erradicación (órganos judiciales, cuerpo de policía, sistema educativo...). Asimismo, se alude a otras dimensiones relacionadas con este tipo de violencia como sus manifestaciones en la publicidad, la pornografía, la influencia de la violencia en relación a la posición de las mujeres en la sociedad (independencia económica, participación en la vida política y en la toma de decisiones....) o el acoso psicológico a madres y embarazadas.
- Se propone un nuevo enfoque político integral de la violencia de género por parte de la Unión Europea que tiende a la elaboración de un instrumento penal, en forma de directiva, relativo a la lucha contra la violencia de género y por la puesta en marcha de medidas que deben tener en cuenta seis objetivos principales, a saber: la política, la prevención, la protección, la persecución, la previsión y la asociación. En este sentido, apuntan las resoluciones del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009, sobre eliminación de la violencia contra la Mujer y la de 12 de diciembre de 2012, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011).
- Se solicita a los Estados miembros que mejoren sus legislaciones y políticas con el propósito de combatir toda forma de violencia contra la mujer y se les insta a tomar una serie de medidas tendentes a corregir ciertas disfunciones que dificultan la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entre estas últimas podemos citar, por ejemplo, la tipificación como delitos de la violación y la violencia sexual contra las mujeres o, en otro orden de cosas, la revisión de su sistema estadístico nacional que aporte mayor claridad a los datos relativos a las agresiones por violencia de género y facilite su recopilación.

2.2. La protección de las víctimas de la violencia de género en la Unión Europea

Como se ha mencionado con anterioridad, la evolución normativa vinculante para los Estados en materia de violencia de género sólo se ha producido en sede de protección de víctimas de violencia. No obstante, la razón de la evolución en esta materia se debe al interés de la UE en fortalecer la cooperación entre autoridades nacionales, y en especial, la cooperación entre autoridades judiciales a través del reconocimiento mutuo de sus decisiones, tanto en materia penal como civil. En este escenario se han producido recientemente las aportaciones normativas más interesantes que permiten garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género así como su libertad de circulación por el territorio de la Unión Europea, sin que el ejercicio de esta libertad conlleve la restricción o disminución del nivel de protección del que gozan en su país de origen.

El Consejo Europeo adoptó en 2009 el Programa de Estocolmo, entre cuyos objetivos encontramos el de hacer efectiva la libre circulación de los ciudadanos y sus familiares en la Unión. Con este propósito, se recomienda prestar una mayor protección, incluida la jurídica, y un mayor apoyo a los grupos vulnerables en situaciones particularmente expuestas. En esta categoría se incluyen específicamente a las mujeres que son víctimas de violencia o de mutilación genital, a las cuales se debe proporcionar asimismo una ayuda financiera; además, estas víctimas son merecedoras de una especial consideración cuando se encuentren en un Estado miembro del cual no son nacionales o residentes, es decir, cuando en ejercicio de su libertad de circulación se hayan desplazado a otro estado miembro. En este sentido, el Consejo Europeo insta a la Comisión y a los Estados miembros “a examinar los modos de mejorar la legislación y las medidas prácticas de apoyo a la protección de las víctimas, a mejorar la aplicación de los instrumentos existentes y a adoptar medidas especiales de protección que deberían ser efectivas en toda la Unión”.

En la confluencia entre objetivos y acciones a desarrollar, se generan la Directiva 2011/99/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la Orden Europea de Protección (OEP), en el ámbito de cooperación judicial en materia penal; a la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos; y del Reglamento nº 606/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil. Aunque ninguna de las tres normas se dirige de forma específica a las víctimas de violencia de género, todas se preocupan por establecer un nexo directo con este tipo de agresiones

contra las mujeres, recurriendo a las resoluciones del Parlamento Europeo que instan a la Unión y a los Estados miembros a tomar medidas efectivas para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres y a tomar las medidas necesarias para proteger a las víctimas de este tipo de agresiones (Considerando 4 de la Directiva 2011/99/UE), o como ejemplo para determinar el ámbito de aplicación de la norma (Considerando 6 del Reglamento 606/2013).

Además, en el caso de la Directiva 2012/29/UE, relativa a los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas, se incorpora también una definición conceptual de “violencia de género”, que recoge ampliamente todos los elementos que permiten configurar su naturaleza específica. En ese sentido, se señala en su preámbulo que:

La violencia por motivos de género se entiende como una forma de discriminación y una violación de las libertades fundamentales de la víctima y comprende, sin limitarse a ellas, la violencia en las relaciones personales, la violencia sexual (incluida la violación, la agresión sexual y el acoso sexual), la trata de personas, la esclavitud y diferentes formas de prácticas nocivas, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y los denominados «delitos relacionados con el honor». Las mujeres víctimas de la violencia por motivos de género y sus hijos requieren con frecuencia especial apoyo y protección debido al elevado riesgo de victimización secundaria o reiterada, o de intimidación o represalias ligadas a este tipo de violencia.

Cuando la violencia se comete en una relación personal, la comete una persona que es o ha sido cónyuge o compañera de la víctima, o bien otro familiar de la víctima, tanto si el infractor comparte, o ha compartido, el mismo hogar con la víctima, o no. Dicha violencia puede consistir en violencia física, sexual, psicológica o económica, y puede causar lesiones corporales, daños psíquicos o emocionales, o perjuicios económicos. La violencia en las relaciones personales constituye un grave problema social, a menudo oculto, que puede causar traumas psicológicos y físicos sistemáticos de graves consecuencias, debido al hecho de que es cometida por una persona en la que la víctima debería poder confiar. Por lo tanto, las víctimas de violencia en relaciones personales pueden necesitar medidas de protección especiales. Las mujeres se ven afectadas por esta violencia en grado desproporcionado, y la situación puede agravarse aún más cuando la mujer depende del infractor en lo económico, lo social o para su derecho a la residencia.

En cuanto a las medidas de protección de la Directiva 2011/99/UE y el Reglamento 606/2013, se prevén tres tipos de medidas que deben garantizar los Estados de destino cuando llega una víctima que ya tiene acreditadas dichas medidas en su país de origen o residencia: restricciones relativas al acceso a determinados lugares, a las comunicaciones y a la proximidad de la víctima (artículo 5 de la Directiva y artículo 3 del Reglamento). Estas tres medidas son conocidas en todos los Estados miembros, y presumiblemente, cubren la mayor parte de las situaciones que estas dos normas pretenden resolver. De hecho, no se detallan los actos o comportamientos delictivos que pueden dar lugar a la necesidad de emitir determinadas medidas de protección, sino que tanto la Directiva como el Reglamento aluden genéricamente a aquellas medidas necesarias para proteger a una persona cuando existan motivos fundados para considerar que su vida, su integridad física o psicológica, su libertad personal, su seguridad o integridad sexual está en riesgo. Asimismo, y con objeto de priorizar la protección frente a las diferentes tradiciones jurídicas, no se considera determinante la naturaleza judicial o no de la autoridad competente para dictar las medidas de protección, siempre que se garanticen el respeto a los derechos fundamentales.

En este sentido, el Reglamento 606/2013 y la Directiva 2011/99/UE son normas complementarias pero mutuamente excluyentes, lo que significa que una orden de protección emitida por un Estado miembro que establece medidas puramente criminales será reconocida en otra jurisdicción de la UE, que no conoce más que las medidas de protección de carácter civil y viceversa. Otras diferencias relevantes son que el Reglamento, como otros instrumentos de reconocimiento mutuo, se basa en el reconocimiento automático de las resoluciones en materia civil adoptadas por un Estado miembro en otro Estado miembro. Para ello, la autoridad competente del Estado emisor expide un certificado que contiene toda la información relevante para el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección, y lo entrega a la persona protegida. Con el fin de preservar la autonomía de la persona protegida, el Reglamento no prevé la transmisión directa de la resolución entre las autoridades competentes, sino que la presentación o no del certificado en el Estado de reconocimiento y, por tanto, la invocación de la protección, se hace depender de la voluntad de la persona protegida. En cambio, si se sigue el procedimiento de la Directiva, las medidas de protección se transmiten entre las autoridades competentes.

Asimismo, las medidas reconocidas en aplicación del Reglamento deben ser aplicadas en el Estado de ejecución sin necesidad de un procedimiento especial, mediante la simple presentación del certificado. En la misma lógica, se prevén un número muy limitado de denegación y no se admiten recursos contra la

expedición de un certificado ni se admite la revisión de las medidas de protección adoptadas en el Estado de reconocimiento. Por el contrario, la Directiva admite un amplio número de supuestos de rechazo, y con un carácter más abierto. Otra diferencia relevante del Reglamento respecto de la Directiva es que, dada la divergencia en la duración de las medidas de protección en los Estados miembros, el reconocimiento de los efectos de las medidas de protección tiene un alcance temporal limitado, de doce meses como máximo, a partir de la fecha de expedición del certificado, con independencia de que la medida de protección original tenga una duración mayor.

2.3. La Convención de Estambul

En la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, se anuncian los objetivos estratégicos y las acciones que deben llevarse a cabo para superar los obstáculos para el desarrollo y la promoción de las mujeres. Con posterioridad, la ONU y la propia Unión Europea han retomado periódicamente la Declaración de Beijing, con el fin de examinar y evaluar el estado de los compromisos adquiridos y de los progresos alcanzados. Por su parte, en la Unión Europea se han realizado diversos informes acerca del desarrollo de los compromisos adquiridos en Beijing; en mayo de 2000, en 2005 y en 2010. En este último, se constata la voluntad de muchos Estados miembros de intentar “conseguir una estrategia coordinada para luchar contra la violencia sobre las mujeres”, se observa “un desarrollo continuado de políticas, en especial en lo que se refiere a la tipificación como delito de la violencia contra las mujeres y en la protección y el apoyo a las víctimas, pero preocupa la falta de un esfuerzo concentrado para evaluar las políticas y la práctica que garantice la correcta aplicación de las medidas”; así mismo se evidencia la dificultad “para coordinar la labor de protección y apoyo a las víctimas”.

A escala europea, el 11 de mayo de 2011, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó en Estambul el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que se ha convertido en el primer tratado de derechos fundamentales, de carácter vinculante, sobre violencia contra las mujeres en el ámbito europeo. El Convenio establece un marco integral de actuación sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación y de diligencia debida. Así, según su artículo primero, los objetivos del texto son:

- a. Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
- b. Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres.
- c. Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
- d. Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
- e. Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Para ello el propio convenio se articula a partir de la estructura denominada de las tres "P" (prevención, protección y persecución), a la que se añade una cuarta relativa a las Políticas integradas y la recogida de datos. A partir de ellas se va delimitando la extensión de las obligaciones y de la diligencia debida de los estados en garantizar la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres y en proteger a las víctimas. En los capítulos dedicados al derecho material y procesal es donde se aprecian mayores avances, ya que se regulan cuestiones tales como el mandato de tipificar penalmente ciertas conductas como la mutilación genital, la violencia sexual o los matrimonios forzados, que permiten asemejar este Tratado a un intento positivo de armonización del sistema penal, que deberá ser respetado por todos aquellos Estados y organizaciones que lo ratifiquen. El Convenio se convierte así en el texto jurídico que puede promover los cambios más relevantes en la lucha contra la violencia de género en el ámbito europeo, aunque inicialmente no haya sido aprobado en el seno de la Unión Europea, sino del Consejo.

3. Retos y limitaciones

Solo de forma muy reciente la comunidad internacional ha reconocido que la violencia de género es un atentado contra los derechos humanos y, como tal, el Derecho debe establecer marcos normativos capaces de combatir y eliminar esta violencia. Sin embargo, ello dependerá del modelo explicativo que se asuma por parte del legislador para poder identificar las causas, rasgos, caracteres y efectos. Tras la evolución habida en las distintas disciplinas que han tratado de aproximarse a este fenómeno y la

inclusión de las definiciones amplias de carácter estructuralista en la DEVAW y la Plataforma de Acción de Beijing, el derecho es un instrumento necesario pero no suficiente para combatirla. En una trayectoria similar, la Unión Europea ha adoptado una serie de iniciativas que tratan de hacer frente a la violencia, aunque no sea una de sus competencias, cuyos resultados más relevantes lo constituyen la Directiva 2011/99/UE y el Reglamento 606/2013 junto con el Convenio de Estambul.

En este sentido, los primeros dos instrumentos referidos no son respuestas específicas a la violencia de género, sino a las víctimas en general; en cambio, sí existen normas relativas a determinadas categorías de víctimas, como las relativas a la trata de seres humano, entre otras. Así pues, la violencia de género ha conseguido abrirse paso entre las políticas de la Unión Europea a costa de renunciar a su especificidad. En otras palabras, a pesar de la profusión de textos no vinculantes, la lucha contra la violencia de género no forma parte de las prioridades políticas de la Unión Europea. Sirva de ejemplo que la Unión Europea no haya diseñado una estrategia global en este tema, tal como se comprometió según el Plan de Acción asumido por la Comisión en aplicación del Programa de Estocolmo. La inexistencia de cifras claras, de estadísticas actualizadas, sobre las víctimas de violencia de género, que permitan evaluar la magnitud del problema es otra muestra de la insuficiencia de la atención prestada a la violencia.

Por todos estos motivos podemos señalar que las limitaciones, que a su vez pueden entenderse como retos, a los que se hace frente en la Unión Europea son:

- i. La insuficiencia de haber establecido una definición amplia de violencia de género en el preámbulo de la Directiva 2012/29/UE, especialmente cuando los Estados miembros no comparten un único marco conceptual.
- ii. A consecuencia de la anterior, la falta de voluntad por crear un único código penal europeo o de una armonización tal de la legislación penal de los Estados miembros, de forma tal que permita tipificar la violencia de género, de acuerdo con la definición que se contiene en la Directiva 2012/29/UE.
- iii. La falta de competencia de la Unión Europea para poder adoptar medidas legislativas con carácter vinculante contra la violencia de género.
- iv. La conveniencia de cumplir las obligaciones establecidas en el Convenio de Estambul para combatir esta violencia.

4. Referencias bibliográficas

- Añón Roig, María José y Mestre i Mestre, Ruth (2005). Violencia sobre las mujeres. Discriminación, subordinación y Derecho. En Boix, J. y Martínez, E. (comps), *La nueva ley sobre la violencia de género*, Madrid, Iustel.
- Añón Roig, María José y Merino Sancho, Víctor M. (2012). Violencia de género: un concepto jurídico intrincado. En E. Martínez (dir), *La prevención y la erradicación de la violencia de género. Un estudio multidisciplinar y forense*. Thomson – Aranzadi.
- Asúa Batarrita, Adela (2004). Los nuevos delitos de “violencia doméstica” tras la reforma de la LO 11/2003, de 29 de septiembre. *Cuadernos Penales José María Lidón. Las recientes reformas penales: algunas cuestiones*, 1, 201 – 234.
- Barrère, M^a Ángeles (2008). Género, discriminación y violencia contra las mujeres, en Laurenzo, Patricia, Maqueda, M^a Luisa y Rubio, Ana (coord.), *Género, violencia y derecho* (pp. 27-48). Valencia: Tirant Monografías.
- Bodelón, Encarna (2008). La violencia contra las mujeres y el derecho no-androcéntrico: perdidas en la traducción jurídica del feminismo, en Laurenzo, Patricia, Maqueda, María Luisa y Rubio, Ana (coord.), *Género, violencia y derecho* (pp. 275 – 300). Valencia: Tirant Monografías.
- Calvo García, Manuel (2006). La respuesta jurídica frente a la Violencia familiar de Género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en Bernuz Beneitez, María José y Pérez Cepeda, Ana Isabel (coord.), *La Tensión entre libertad y seguridad. Una aproximación socio-jurídica* (pp. 245 – 276). Logroño: Universidad de la Rioja. Servicio de Publicaciones. Colección Jurídica, 22.
- Crenshaw, Kimberlé (1996). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color, en Weisberg, D. Kelly (ed.), *Applications of Feminist Legal Theory to Women's Lives. Sex, Violence, Work, and Reproduction* (pp. 363 – 377). Philadelphia: Temple University Press.
- Corsi, Jorge (1997). *Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social*. Buenos Aires: Paidós.
- Dobash, Rebecca Emerson y Dobash, Russell P. (1992). *Women, Violence, and Social Change*. London: Routledge.

- (1998). Cross-Border Encounters. Challenges and Opportunities”, en Dobash, Rebecca Emerson y Dobash, Russell P. (ed.), *Rethinking Violence Against Women* (pp. 1 – 22). London: Sage Publications.
- Gangoli, Geetanjali (2006). Engendering Genocide: Gender, Conflict and Violence. *Women´s Studies International Forum*, 29, 534 – 538.
- Hooks, bell (2000). *Feminist Theory. From Margin to Center*. Cambridge: South End Press Classics.
- Izquierdo, María Jesús (1996). “Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género” en Fisas, Vicenç (ed.), *El sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia* (pp. 61 – 92). Barcelona: Icaria.
- Johnson, Michael P. (1995). Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women, *Journal of Marriage and the Family*, 57-2, 283 – 295.
- (2005). Domestic Violence: It’s Not About Gender – Or Is It?, *Journal of Marriage and Family*, 67-5, 1126 – 1130.
- Juliano, Dolores (2004). *Excluidas y Marginales. Una aproximación antropológica*. Madrid: Cátedra.
- Kelly, Liz (1998). *Surviving Sexual Violence*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- y Radford, Jill (1998). Sexual Violence Against Women and Girls: An Approach to an International Overview, en Dobash, R. Emerson y Dobash, Russell P. (ed.), *Rethinking Sexual Violence* (pp. 53 – 76). London: Sage Publications.
- Larrauri, Elena (2007). *Criminología Crítica y Violencia de Género*. Madrid: Trotta.
- (2008). *Mujeres y sistema penal: violencia doméstica*. Buenos Aires: B de F. Montevideo.
- Laurenzo, Patricia (2005). La violencia de género en la ley integral: Valoración político-criminal, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 7-8, 1 – 23.
- Maqueda Abreu, María Luisa (2006). La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 8-2, 1 – 13.
- Medina Ariza, Juan José (2002). *La violencia contra la mujer en la pareja: investigación comparada y situación en España*. Valencia: Tirant Monografías.

- Mohanty, Chandra Talpade (2008). Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y discursos coloniales, en Hernández Castillo, Rosalva A. y Suárez Navaz, Liliana (coord.), *Descolonizando el feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes* (pp. 117 – 164). Valencia: Cátedra.
- Pitch, Tamar: Justicia penal y libertad femenina, en Nicolás, Gemma y Bodelón, Encarna (comp.), *Género y Dominación. Críticas feministas del derecho y el poder* (pp. 117 – 126). Barcelona: Anthropos.
- Román Martín, Laura y Oliveras Jané, Neus (2013). La protección a las víctimas de violencia de género en la Unión Europea; En especial, la Orden Europea de Protección, en Pastor Gosálbez, M^a Inmaculada, Román Martín, Laura y Giménez Costa, Ana (Coord.), *Integración Europea y Género* (pp. 89 – 122). Madrid: Tecnos.
- Tamayo, Giulia (1993). Detrás del Espejo (Cursos y discursos de una justicia otra en las estrategias para enfrentar la violencia contra la mujer), en *Vigiladas y Castigadas. Seminario Regional "Normatividad penal y mujer en América Latina y el Caribe* (pp. 101 – 127). Lima: CLADEM. Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
- Tubert, Silvia (2008). La crisis del concepto de género. En Lorenzo, Patricia, Maqueda, María Luisa y Rubio, Ana (coord.), *Género, violencia y derecho* (pp. 89-127). Valencia: Tirant lo blanch. Alternativa.

5. Recursos

A) Recursos Audiovisuales:

- Película: "El círculo" (Dayereh), de Jafar Panahi, Irán, 2000.
- Película: "Kandahar", de Mohsen Makhmalbaf, Irán, 2001.
- Película: "Te doy mis ojos", de Iciar Bollaín, España, 2003.
- Película: "Cicatrices", de Paco del Toro, México, 2005.

B) Recursos electrónicos:

- Relatoría Especial de Naciones Unidas contra la violencia sobre las mujeres:
<http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx>
- European Union Agency for Fundamental Rights: Información sobre violencia de género
<http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php>
- European Institute for Gender Equality: Recursos contra la violencia de género:
<http://eige.europa.eu/gender-based-violence>

